



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, once de agosto de dos mil veintitrés.

23-029

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **OFELIA LOPEZ MARTINEZ.**
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E., PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.**
Vinculado: **FIDUPREVISORA S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-012-2019-00570-01.
Tema: ineficacia traslado
Decisión: **CONFIRMA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, toda vez que la magistrada **MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA** se encuentra ausente de manera justificada, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A. y Colpensiones E.I.C.E., contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 027** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES.

1.1. LO PRETENDIDO.

Solicitó la demandante, se declare la **INEFICACIA y/o NULIDAD** del traslado al RAIS, considerando la afiliación al RPM sin solución de continuidad. Que se condene a Porvenir S.A. y/o Protección S.A. a devolver a Colpensiones todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, aportes al fondo de solidaridad, sumas adicionales de la aseguradora, comisión por administración, aportes al fondo de garantía de pensión mínima, rendimientos con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C. Que las AFP accionadas asuman a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado como las mermas

sufridas en el capital por gastos de administración. Que se condene a Colpensiones a recibir a la accionante. Finalmente solicitó se condene en costas y gastos del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 21 de octubre de 1962, por lo que a la fecha de presentación de la demanda tenía 56 años de edad, y 1595 semanas de cotización.
- ✓ Que se afilió inicialmente al FOMAG hasta abril de 1992, y que posteriormente en agosto de 1997, se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A.
- ✓ Que por ficción legal debe entenderse afiliada al ISS hoy Colpensiones.
- ✓ Que la decisión de traslado, se realizó sin recibir información sobre las semejanzas, diferencias, ventajas, y desventajas que tenían los dos regímenes pensionales, así como sobre las consecuencias que acarrearía el traslado.
- ✓ Que el asesor del fondo privado le indicó que obtendría una mejor pensión que en el RPM, además de que el futuro del ISS era incierto.
- ✓ Que solicitó a Colpensiones E.I.C.E el traslado de régimen pensional, entidad que, mediante comunicado del 28 de junio de 2019, negó la pretensión.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Colpensiones E.I.C.E, se opuso a la totalidad de las pretensiones. Estimó como ciertos los hechos relativos a la fecha de nacimiento de la accionante, las semanas de cotización reportadas, la afiliación al FOMAG, el traslado de régimen, y las solicitudes incoadas ante Porvenir S.A. y Colpensiones E.I.C.E. Frente a los demás hechos adujo no constarle, al tratarse de supuestos exógenos al conocimiento de la entidad.

Protección S.A, se opuso a las pretensiones incoadas. Aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento de la accionante, la omisión de información respecto a la reasesoría pensional, aclarando que para la fecha del traslado no existía dicha directriz, y la obligación de Colpensiones de recibir a la accionante en caso de declararse la ineficacia de la afiliación. Frente a los demás hechos manifestó que, si bien es cierto que la accionante suscribió formulario de afiliación a Colmena hoy Protección S.A., el mismo fue declarado nulo por no cumplir con el periodo mínimo de permanencia en la AFP inicial. Aun así, indicó que los asesores de Protección S.A. son capacitados permanentemente para orientar a los posibles afiliados, explicando lo concerniente al sistema general de pensiones,

características de regímenes pensionales, y los demás conceptos propios de una asesoría adecuada, completa y acorde con la normatividad vigente.

Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones. No aceptó ningún hecho del libelo demandatorio. Frente al traslado de régimen pensional manifestó que fue producto de una decisión informada, y libre, tal y como consta en la solicitud de vinculación. Aclaró que conforme a la Circular 019 de 1998 de la Superintendencia Financiera de Colombia, la única exigencia establecida a efectos de materializar el traslado, era la de plasmar la voluntad del afiliado mediante el formulario de afiliación.

Finalmente, la Fiduprevisora S.A. se allanó a las pretensiones considerando que no incumben ni afectan a dicha entidad, exceptuando la condena en costas procesales. Frente a los hechos, manifestó que no le constan, ateniéndose a lo probado en el transcurso del proceso bajo la aplicación del artículo 167 del C.G.P.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2023, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación de la señora OFELIA LÓPEZ MARTÍNEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.838.018, al régimen de ahorro individual con solidaridad en el marco de la afiliación adelantada por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A. entendiéndose para todos los efectos afiliada sin solución de continuidad en el RPMCD dirigida por la ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A., representada legalmente por la doctora ANA LUCIA ECHEVERRI RESTREPO o por quien haga sus veces, a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, traslade a ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, el valor de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros de la señora OFELIA LÓPEZ MARTÍNEZ; de igual modo debe trasladar lo descontado por concepto de gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexado con cargo a sus propios recursos. A la par se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCIÓN S.A., representada legalmente por la doctora Gloria Margarita Rodríguez

Uribe o por quien haga sus veces, a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, lo descontado durante el tiempo que estuvo afiliada, por concepto de gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados con cargo a sus propios recursos. A la par se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES EICE., representada legalmente por el doctor JUAN MIGUEL VILLA LORA, o por quien haga sus veces, la afiliación de la señora OFELIA LÓPEZ MARTÍNEZ, al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad y recibir los mencionados valores e integrarlos al fondo común que administra, y que, las semanas acreditadas por la AFPs se refleje en su historia laboral.

QUINTO: DECLARAR infundadas las excepciones de prescripción y compensación y falta.

SEXTO: ABSOLVER a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG, de todas las pretensiones impetradas en su contra.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., se fijan agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.

Sin costas ni agencias en derecho a cargo de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, ni la AFP PROTECCIÓN S.A., ni LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG.

OCTAVO: ADVERTIR, que de no ser apelada la presente providencia se remitirá el proceso a la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

Teniendo en cuenta que el apoderado de la ACP COLPENSIONES no interpuso recurso de apelación, se dispone ENVIAR al Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral la presente decisión para que surta el grado jurisdiccional de consulta.”

Dentro del término concedido por la ley, Porvenir S.A. y Colpensiones E.I.C.E. interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR.

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quienes recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN.

2.2.1 PRESENTADO POR PORVENIR S.A.

Solicitó se revoque la providencia de primera instancia, considerando que no se está frente a un caso de traslado de régimen pensional pues la accionante nunca estuvo afiliada al RPM, por lo que se debe analizar que, al manifestar su voluntad de permanecer y de afiliarse a Porvenir, se dio una selección inicial de régimen y no un traslado, por lo que no es factible que la accionante se ampare en un desarrollo jurisprudencial, el cual únicamente se predica cuando existe un traslado de régimen. Resaltó que la Sala Laboral de la CSJ, ha indicado que conforme con el artículo 3 del Decreto 692 de 1994, la afiliación al sistema general de pensiones es única y permanente, sin embargo, ha aclarado que *tal circunstancia en manera alguna se puede equiparar a sostener que aquellos trabajadores que se encontraban activos a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y que presenten afiliación en fecha anterior a esta, por el solo hecho de tenerla, hubiesen seleccionado uno de los regímenes traídos por la norma, particularmente el RPM (sic)*, según lo manifestó dicha corporación en sentencia 39.772 de 2010, reiterada en sentencia SL 2324 de 2019 y SL 214 de 2020. Indicó que según las pruebas que obran en el expediente, la accionante efectuó sus cotizaciones al FOMAG hasta el 31 de marzo de 1992, y tan solo fue hasta agosto de 1997, que reanudó las cotizaciones a pensión, y lo hizo con Porvenir en el RAIS, por lo que no se puede concluir que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, la accionante ya había seleccionado algún régimen, pues en ese momento, no se encontraba activa en el sistema, de ahí que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, ella optó por el RAIS, concluyendo así, que se trata de una vinculación inicial de régimen, lo que impide la aplicación de la jurisprudencia relacionada con la ineficacia del traslado de régimen pensional. Reiteró que no es posible retrotraer la situación del afiliado, pues de hacerlo, la accionante quedaría sin afiliación alguna al sistema general de pensiones. Para el efecto, trajo a colación la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro del proceso 2021-314, donde se adujo:

“conforme lo ha dispuesto esta sala en casos similares y se reitera con fundamento en el precedente jurisprudencial anterior, es evidente que el juez a quo no estaba habilitado para declarar la ineficacia de la vinculación inicial de la demandante al RAIS, puesto que la consecuencia de dicha declaración sería que quedara sin régimen pensional alguno, lo que implica de acuerdo con el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y los efectos de la ineficacia del acto jurisprudencialmente reseñados, que el afiliado pierda dicha calidad, no cuente con ninguna vinculación al sistema y pueda afiliarse nuevamente sin la posibilidad de que las cotizaciones efectuadas previo a dicha declaratoria se remitan al otro régimen, por la razón de que se quebranta el principio de sostenibilidad financiera del sistema, al imponer a un régimen la obligación de responder por una obligación que nunca se construyó bajo su imperio, y en

el caso del RPM, no contribuyó en ningún momento al fondo común, con lo que podría llegar a afectar el derecho de los actuales y futuros pensionados”.

Conforme a lo anterior, solicitó se revisen las condiciones particulares de la afiliación de la accionante.

De otro lado, en caso de confirmar la providencia, solicitó que se revoque la orden de indexación de los emolumentos que deben retornarse (gastos de administración, primas de seguros previsionales, fondo de garantía de pensión mínima), pues conforme a la sentencia C 00161 del 13 de mayo de 2010 de la Corte Constitucional y la sentencia SL 9316 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, se debe tener en cuenta que dentro de las obligaciones de las AFP, se encuentra la de garantizar la rentabilidad mínima de las cuentas de ahorro individual de los afiliados, por lo que resulta incompatible ordenar la figura de la indexación, pues los valores de dicha cuenta no se han visto afectados por la inflación, por el contrario han generado rendimientos muy superiores a los que otorga el RPM. Respecto a la incompatibilidad de la indexación, el Tribunal Superior de Cundinamarca en sentencia del 25 de julio de 2022, dentro del proceso de la señora Felisa Poveda, y el Tribunal Superior de Cali, en sentencia del 20 de enero de 2023, indicaron que, con la devolución de los rendimientos, se compensa cualquier depreciación de la moneda, por lo que dicha figura resulta incompatible y comporta una doble sanción.

2.2.2 PRESENTADO POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, considerando que Colpensiones es un tercero ajeno al negocio jurídico celebrado, por lo cual no puede verse perjudicado por el error en el cual incurrió la demandante, ya que la afiliación al RAIS, se dio por actos libres y voluntarios. Aunado a lo anterior, resaltó que la accionante nunca estuvo afiliada al ISS, lo que resulta inoponible a Colpensiones, pues teniendo en cuenta los efectos de la ineficacia, no hay lugar a que la demandante retorne a Colpensiones cuando nunca estuvo afiliada a dicha entidad, por el contrario resaltó que estuvo afiliada al FOMAG como régimen exceptuado, quien después se trasladó al RAIS efectuando además movilidad dentro de este régimen, y solo hasta el momento en que se encontraba a menos de 10 años para pensionarse, decide querer afiliarse a Colpensiones. Destacó que los aportes efectuados al RPM, fueron efectivamente devueltos por la afiliación que presentaba al RAIS.

Argumenta que, de declararse la ineficacia de la afiliación, la demandante quedaría sin régimen pensional alguno, por cuanto no es Colpensiones el llamado a responder por la falta de afiliación al RPM. Considero que recibir a una persona que nunca ha aportado al RPM, descapitalizaría el fondo común, pues los dineros del RAIS se han visto deteriorados por el paso del tiempo, lo que implica que no sean suficientes para financiar una pensión.

2.3 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

2.3.1 PRESENTADOS POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Resaltó que la accionante se encuentra inmersa en una prohibición legal para retornar al RPM, la cual se determina en el artículo 2 de la ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 13 de la ley 100 de 1993, bajo el entendido que Colpensiones no cuenta con un capital suficiente para el reconocimiento de una pensión en el futuro.

De otro lado, indica que la carga dinámica de la prueba en los casos de ineficacia de la afiliación, implica ver las particularidades de cada caso, por lo que al ser la afiliación un contrato inter-partes, la accionante también tiene obligaciones que implican la aceptación de los efectos legales, esto conforme al artículo 2.6.10.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

De otro lado, expuso que el deber de información se compone de varias etapas surgidas a lo largo del tiempo, por lo que el análisis de la conducta de la AFP debe hacerse teniendo en cuenta las normas vigentes al momento de la afiliación, pues el juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación.

Finalmente, resaltó que debe tenerse en cuenta el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS transgrede lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

2.3.2 PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.

Solicitó se revoque de forma integral la sentencia de primera instancia, en razón a que, no es posible aplicar los efectos de la ineficacia de ineficacia del traslado de régimen por cuanto la accionante jamás estuvo vinculada al RPM, por el contrario, era parte de un régimen exceptuado de conformidad con el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, pues el efecto de la ineficacia es retrotraer todo al “*statu quo ante*”, lo cual no podría darse si el afiliado no perteneció al RPM, para cimentar lo anterior, citó la sentencia SL3587 del año 2021, en la cual se explicó:

“Conviene memorar que como la consecuencia de la ineficacia del traslado de régimen pensional, es volver la situación al estado en que se hallaría de no haber existido el acto de traslado (statu quo ante), la demandante no puede pretender retornar a un régimen al cual nunca perteneció, pues únicamente ha estado afiliada al RAIS desde el 1 de octubre de 1995, que no al RPM, por lo que no está llamado a operar el mecanismo reclamado por simple sustracción de materia (CSJ SL1688-2019 y CSJ SL3464-2019).” (Subrayado y Negrilla fuera del texto original).”

En cuanto a los efectos de la ineficacia en el caso concreto, manifestó que:

“Al ser la afiliación con Porvenir su primera y única vinculación al sistema a la vigencia de la Ley 100 de 1993, no resulta dable hablar de traslado de régimen, en tanto hasta ese momento (28 de febrero de 1995), expreso su voluntad de selección de régimen y mal podría decirse que para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, la actora ya hubiera escogido “tácitamente” pertenecer a alguno de los dos regímenes creados, en virtud de la afiliación que de tiempo atrás hubiera efectuado. Por lo anterior, no es posible que se retrotraigan las cosas al estado anterior, puesto que la consecuencia de tal declaración sería la de que la demandante quedara sin afiliación a régimen pensional alguno.

Lo anterior significa que la parte actora pretende ampararse en un desarrollo jurisprudencial que se predica cuando existe un traslado de régimen, pero este no es el caso, razón más que suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda.”

De otro lado, indicó que al tenor del principio de congruencia de la sentencia – artículo 281 del C.G.P., al no haberse discutido y menos probado la mala fe de Porvenir S.A. en la celebración del acto jurídico de traslado, no puede condenársele a “restituir a favor del afiliado y por ende de un tercero como es Colpensiones”, los rendimientos financieros que logró gracias a la gestión en la administración de los aportes en el RAIS, en igual medida no debe ordenarse la devolución de las primas de seguros por cuanto el afiliado siempre estuvo protegido por las contingencias que ellas amparan.

De forma subsidiaria, en caso de confirmar la sentencia, resaltó que *el valor a trasladar correspondería a los intereses que la persona hubiese obtenido en el RPM*, esto es, el monto de los aportes + rentabilidad RISS (Colpensiones), por cuanto de acuerdo con el precedente judicial, la ineficacia implica retrotraer las cosas a su estado anterior como si nunca hubiese existido y, en aplicación del principio de inescindibilidad de las normas, la condena debería guardar consonancia con este principio.

En el evento en que se ordene el reintegro de la totalidad de los rendimientos, solicitó se autorice a Porvenir S.A., a descontar de tal concepto las restituciones mutuas a que haya lugar, teniendo en cuenta que la AFP realizó una gestión a favor del afiliado que le generó los referidos rendimientos

Frente a la indexación de las sumas a retornar, consideró que conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C- 00161 de 2010 y por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 9316 de 2016, teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones que deben cumplir las AFPS, está la de garantizar la rentabilidad mínima de las cuentas de ahorro individual de cada uno de sus afiliados, es incompatible y excluyente ordenar la indexación, pues los recursos de la cuenta de ahorro individual de la parte demandante no se han visto afectados por la inflación, por el contrario, han generado rendimientos muy superiores a los que garantiza el RPM, por lo que ordenar a Porvenir S.A. a indexar cualquier suma de dinero, significa imponer una doble sanción, por cuanto, los rendimientos financieros obtenidos, superan la posible pérdida del poder adquisitivo de los dineros del afiliado representados en los aportes pensionales.

3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA.

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, el problema jurídico a resolver estribaría en determinar si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que la accionante no reporta afiliación anterior al RPM. En caso afirmativo, se determinará qué haberes le corresponde retornar a PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4 CONSIDERACIONES.

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el

paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún

caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 28 de febrero de 1995, fecha en la cual suscribió el formulario de afiliación a Porvenir S.A (fl 4 del archivo 32 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración, y por la ausencia de una asesoría integral en donde se indique las características del RAIS, las ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente la señora OFELIA LOPEZ MARTINEZ, en el aludido interrogatorio expuso que su nivel de estudios era profesional, desempeñándose como Licenciada en Administración Educativa y que no estaba laborando para ese momento. Respecto al traslado a Porvenir S.A, adujo que, días después de ingresar a trabajar en un preescolar, se les informó a los docentes que tenían que pasar a un salón, en donde se les iba a dar información sobre las modalidades del colegio, entre las que se encontraba el tema de los fondos privados, resaltó que en un lapso corto de tiempo, el asesor de la AFP le indicó que eran su mejor opción, por cuanto era una empresa muy sólida, aunado a que el seguro social se iba a terminar, razón que consideró suficiente para suscribir el formulario de afiliación. Resaltó que el asesor le brindó información mínima, que no le hicieron un comparativo entre ambos regímenes y que no le hablaron de conceptos como: cuenta de ahorro individual, capital necesario

para causar una pensión de vejez, pensión anticipada, forma de liquidación pensional, y modalidades de pensión en el RAIS.

Resaltó que su motivo para retornar a Colpensiones es la cuantía de su mesada pensional, pues el monto ofrecido por el fondo privado no es suficiente para solventar sus obligaciones. Finalmente aclaró que nunca realizó cotizaciones al ISS.

Respecto a la movilidad efectuada a Protección y su posterior retorno a Porvenir, destacó fueron acciones ejecutadas por la institución educativa donde laboraba, entidad que se encargó de llenar el formulario de afiliación; destacó que dicha afiliación fue anulada por cuanto se encontraba afiliada con antelación a otra entidad.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder

a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso de la señora LOPEZ MARTINEZ, quien en 1998 se vinculó a Colmena hoy Protección S.A., y posteriormente retorno a Porvenir S.A., conforme se aprecia en el folio 4 del archivo 30 del expediente digital, siendo Porvenir S.A. el fondo donde actualmente permanece. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, y que para el caso concreto, se dio por acción exclusiva del empleador, sin que medie ningún tipo de asesoría pensional en favor de la accionante.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los**

cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígase aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a las administradoras del RAIS accionadas, trasladar a Colpensiones E.I.C.E todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Porvenir S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció Protección S.A., pues a pesar de haberse declarado nula la movilidad

efectuado a dicha AFP, se avizora que los 3 ítems que componen los gastos de administración, fueron efectivamente deducidos de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante el tiempo de permanencia de aquella a esta AFP, por lo que en aras de cumplir con el precedente jurisprudencial decantado, es necesario que dicha administradora retorne los conceptos que descontó con motivo de la afiliación de la actora

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que *«las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder»*, debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo, toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.I.C.E debidamente indexado por parte de Protección S.A. y Porvenir S.A., teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de

devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, Porvenir S.A. y Protección S.A. deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se **CONFIRMARÁ** el fallo proferido por el a quo.

Finalmente, conforme a los argumentos expresados por Porvenir S.A. y Colpensiones E.I.C.E. en sus recursos de alzada, es importante señalar que si bien para el año 1995 cuando se dio el traslado al RAIS, la señora OFELIA LOPEZ MARTINEZ no se encontraba cotizando al ISS, y por el contrario, su última vinculación en el año 1992, se reporta al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no es un supuesto factico que desligue, desborde o distorsione los efectos de la ineficacia de la afiliación, pues la esencia de tal concepto, se direcciona a subsanar el defecto informativo propiciado por la AFP, de forma tal que el afiliado tenga la certeza de haber tomado una decisión previa e informada, y al retrotraer las cosas al estado anterior, de ninguna manera se puede entender que la accionante permanezca sin afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, por el contrario, al existir una omisión en la información brindada por parte de la AFP, y siguiendo el tenor del Acto Legislativo 01 de 2005, su retorno debe ordenarse a COLPENSIONES como único administrador del régimen de prima media con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, más aun cuando para la fecha del traslado, la demandante fungía como afiliada obligatoria al sistema de conformidad con lo expuesto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema.

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

Se condenará en costas en esta instancia a Porvenir S.A. y Colpensiones E.I.C.E. a favor de la demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad.

5 DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 06 de febrero de 2023 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **OFELIA LOPEZ MARTINEZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 24.838.018, en contra de **PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.**

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. y Colpensiones E.I.C.E. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad, y a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Sin firma por ausencia justificada



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	OFELIA LOPEZ MARTINEZ.
Demandado:	COLPENSIONES E.I.C.E, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.
Vinculado:	FIDUPREVISORA S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-012-2019-00570-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	CONFIRMA SENTENCIA.
Fecha de la sentencia:	11/08/2023.

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 14/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario